LEGISLACIÓN GENERAL

LEY 34/2002 de Servicios de Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico

Arts. 8 (posibilidad de interrupción del servicio por vulneración de derechos o discriminación), 8 (en la elaboración de los códigos de conducta se contará con las personas con discapacidad, Disposición Adicional Quinta (Accesibilidad a la información proporcionada por los medios, a la web, y se promoverá la accesibilidad en otros soportes).

LEY 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

Arts. 3.e (principios: defender intereses y no discriminación a colectivos como personas con discapacidad), 22.1.c (garantizar oferta suficiente de teléfonos de pago accesibles y servicios gratuitos a emergencias 112), 22.1.d (acceso en igualdad de las personas con discapacidad a servicios de teléfono en ubicaciones fijas), 22.2 (posibilidad de garantizar la igualdad de elección al usuario con discapacidad del operador, y posibilidad de establecimiento de ayudas directas).

Disposición Adicional 5.2 (inclusión de las personas con discapacidad a través de sus organizaciones en el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información), Anexo II 30 (Definición de servicio público de pago, incluye referencia a las personas con discapacidad).

REAL DECRETO 209/2003, sobre registros y las notificaciones telemáticas, cuya disposición adicional primera establece que:

El registro telemático y el servicio de notificación telemática deberán cumplir los requerimientos en materia de accesibilidad establecidos por la Iniciativa para una Web Accesible (WAI) del Consorcio World Wide Web y, en particular, las especificaciones de la Recomendación de 5 de mayo de 1999 sobre Pautas de Accesibilidad del contenido en la Web (WCAG), versión 1.0, en su nivel AA.

LEY 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

En su disposición adicional novena, denominada garantía de accesibilidad para las personas con discapacidad y de la tercera edad, establece que:

“Los servicios, procesos, procedimientos y dispositivos de firma electrónica deberán ser plenamente accesibles a las personas con discapacidad y de la tercera edad, las cuales no podrán ser en ningún caso discriminadas en el ejercicio de los derechos y facultades reconocidos en esta ley por causas basadas en razones de discapacidad o edad avanzada”.

REAL DECRETO 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios.

Art 30.2 (guías telefónicas accesibles), 32.4 (planes adaptación teléfonos públicos de pago), 33.2 (el operador asignado garantizara oferta de teléfonos accesibles), 35.2.a) (condiciones especiales de remisión de facturas e información a personas ciegas).

LEY 10/2005 de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por cable y de Fomento del Pluralismo. (Disposición Adicional 2ª: Obligación de las Administraciones a garantizar la accesibilidad).

- *Incorpora a su articulado una disposición que obliga a las Administraciones a garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los nuevos servicios.*
- *La disposición señala textualmente que "las Administraciones competentes, previa audiencia a los representantes de los sectores afectados e interesados, adoptarán las medidas necesarias para garantizar desde el*

inicio la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios de televisión digital terrestre".

- *Añade, además, que "para conseguir este fin, las medidas que se adopten se atenderán a los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas".*

LEY 29/2005 de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional

Esta ley establece el régimen jurídico de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación promovidas o contratadas por la Administración General del Estado y por las demás entidades integrantes del sector público estatal. Esta Ley no afecta ni será de aplicación a las campañas de carácter industrial, comercial o mercantil que desarrollen los sujetos enumerados en el apartado anterior en el cumplimiento de los fines que les son propios.

LEY 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal.

Las organizaciones representativas de personas con discapacidad tendrán un representante en el Consejo Asesor de la Corporación RTVE, según los términos del Proyecto de Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal aprobado por las Cortes Generales y publicado hoy en el BOE.

El Consejo Asesor de la Corporación RTVE se configura como el órgano de participación de la sociedad en la los medios audiovisuales de titularidad estatal y estará compuesto por un total de quince miembros, uno de ellos en representación de las organizaciones de personas discapacidad.

La nueva Ley contiene, además, otros aspectos relacionados con la discapacidad. Así, en el artículo 25 se consagra el principio de no discriminación de las personas con discapacidad en la programación del servicio público de la Corporación RTVE. De igual modo, en el artículo 3 se obliga a evitar cualquier forma de discriminación a las personas con discapacidad en el desarrollo de la Sociedad de la Información a través del servicio público de radio y televisión.

ORDEN ITC/912/2006, de 29 de marzo, por la que se regulan las condiciones relativas a la calidad de servicio en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas.

La Orden establece las condiciones relativas a la calidad de servicio en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y a otros aspectos afines, desarrollando así lo establecido en el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril. Regula los aspectos siguientes: la información a los usuarios sobre los niveles de calidad de servicio relativos a los servicios de telefonía disponible al público, acceso a Internet y consulta telefónica sobre números de abonado; el contenido de los contratos con los usuarios en lo relativo a la calidad de servicio; los niveles mínimos para el servicio universal; el aseguramiento de la calidad en la precisión de la facturación a los usuarios finales; el tratamiento de los sucesos que conlleven una degradación importante de la calidad de servicio; el desglose de la facturación detallada; las modalidades de presentación de la facturación desglosada a efectos de la protección de los datos de carácter personal.

Art. 14.2 (medición de la calidad de enrutamiento cuando en una zona empeore el servicio a personas con discapacidad), 15.3 (plan de recuperación del nivel de calidad cuando descienda en un 50% para personas con discapacidad).

LEY 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril

Se sustituye el anterior límite que se observaba sólo para invidentes, y se extiende a cualquier discapacidad y afecta a los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública. Se exige, como se venía haciendo, que la utilización se lleve a cabo mediante un procedimiento o medio adaptado a la discapacidad y se añaden dos condiciones más previstas en la directiva Directiva 2001/29/CE: que

los actos guarden una relación directa con la discapacidad y se limiten a lo que ésta exige.

LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Art. 4.3 (principios generales: accesibilidad a la información, accesibilidad universal y diseño para todos).

Disposición Final Séptima (el Gobierno deberá desarrollar reglamentariamente la garantía en el uso para las personas con discapacidad previsto en el art. 4.c).

LEY 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.

Art. 4.Dos.c) (modifica art. 8 Ley 34/2002 introduciendo el respeto a la no discriminación), 4.Dos.Veinte.Cuatro (añade a la Disposición Adicional Quinta de la Ley 34/2002 que el incumpliendo de esta disposición se tramitara por el Régimen de Infracciones y Sanciones de la LIONDAU), 7.Uno.c) (modifica el art. 22 Ley 32/2003 para incluir la garantía de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago accesibles y las llamadas a servicios de emergencia).

Disposición Adicional Undécima (las Administraciones Públicas promoverán el impulso, desarrollo y aplicación de estándares de accesibilidad y diseño para todos).

REAL DECRETO 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas.

Art. 4: Que los usuarios finales con discapacidad tengan acceso al servicio telefónico disponible al público desde una ubicación fija en condiciones equiparables a las que se ofrecen al resto de usuarios finales.

Art. 26. 4. El servicio de atención al cliente será accesible a los usuarios con discapacidad, según lo establecido en el artículo 3 del Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social, aprobado por Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, conforme a los plazos y condiciones establecidos en el mismo.

Capítulo IX: Derecho a prestaciones especiales para personas con discapacidad y de renta baja.

El art. 28 de este capítulo remite al RD 424/2005 y al RD 1494/2007.

El art. 29 de este capítulo prevé los abonos sociales para jubilados y pensionistas con un límite de renta, para los usuarios invidentes o con grave discapacidad visual prevé la aplicación de una determinada franquicia en las llamadas al servicio de consulta telefónica sobre números de abonado y en el establecimiento de las condiciones para la recepción gratuita de las facturas y de la publicidad de información, Usuarios sordos o con graves dificultades auditivas, y también la posibilidad de aplicar este plan especial de precios a las llamadas realizadas desde cualquier punto del territorio nacional que tengan como origen o destino un terminal de telefonía de texto, y que se establezcan a través del centro de servicios de intermediación para teléfonos de texto.

LEY 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual

Las medidas de accesibilidad establecidas, en un escalado progresivo que llega hasta el año 2013, consisten en la subtitulación, la audiodescripción y la emisión en lengua de signos.

Con la nueva Ley General Audiovisual, las obligaciones de accesibilidad se extienden a todas las televisiones que tengan la consideración de servicio público, así a todas las de ámbito estatal.

En relación con el subtítulo, por ejemplo, las televisiones de servicio público tendrán que llegar al 90% de toda la programación en 2013, y las de ámbito estatal, al 75%, en esa misma fecha.

Art. 6. 3. Las informaciones a que se refiere este artículo contenidas en páginas de Internet, guías electrónicas de programas y otros medios de comunicación de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual que sirvan para hacer efectivo el derecho a la transparencia regulado en este artículo, deberán ser accesibles a las personas con discapacidad.

Art. 6. 6. Las páginas de Internet, las guías electrónicas de programas y demás canales o vías de comunicación de los prestadores del servicio que sirvan para hacer efectivo el derecho a la transparencia regulado en este artículo, deberán ser accesibles a las personas con discapacidad.

Artículo 8. Los derechos de las personas con discapacidad. (Entero)

Art. 18. 1. Además de lo dispuesto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, en relación con la publicidad ilícita, está prohibida toda comunicación comercial que vulnere la dignidad humana o fomente la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, nacionalidad, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual. Igualmente está prohibida toda publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio.

Disposición transitoria quinta. Servicios de apoyo para las personas con discapacidad.

REAL DECRETO 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de técnico superior en desarrollo de aplicaciones web y se fijan sus enseñanzas mínimas.

El presente real decreto conforme a lo previsto en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, establece y regula, en los aspectos y elementos básicos antes indicados, el título de formación profesional del sistema educativo de Técnico

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. Tiene por objeto el establecimiento del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como de sus correspondientes enseñanzas mínimas. Es un Título de Formación Profesional de Grado Superior, con 2000 horas de duración, y por primera vez se contempla la accesibilidad en su contenido.

LEY 51/2003 DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (desarrollo)

REAL DECRETO 1865/2004, de 6 de septiembre, por el que se regula el Consejo Nacional de la Discapacidad.

- *En virtud del mismo las personas con discapacidad y sus familias participan en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad.*
- *Le corresponde la promoción de la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.*
- *Promueve los principios y líneas básicas de política integral para las personas con discapacidad en el ámbito de la Administración General del Estado.*
- *Promueve el desarrollo de acciones de recopilación, análisis, elaboración y difusión de la información sobre discapacidad.*
- *De los 30 vocales que lo componen, la mitad (15) lo son de la asociación de utilidad pública más representativa (CERMI)*
- *Establece la creación de una Oficina Permanente Especializada encargada de dar respuesta a los ciudadanos sobre temas, cuestiones y problemática relacionada con la discapacidad.*

ORDEN TAS/736/2005, de 17 de marzo, por la que se regula la estructura y funcionamiento de la Oficina Permanente Especializada del Consejo Nacional de la Discapacidad.

REAL DECRETO 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

REAL DECRETO 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad.

El sistema arbitral comprenderá las quejas y reclamaciones de las personas con discapacidad en las siguientes materias: telecomunicaciones y sociedad de la información; espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación; transportes; productos, servicios, actividades o funciones, entre otros.

Asimismo, se crean y regulan las Juntas Arbitrales de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, órganos colegiados de gestión y administración del sistema arbitral cuyo funcionamiento supone un gasto de más de un millón de euros al año, según señaló Fernández de la Vega.

Estas juntas conocerán de las quejas y reclamaciones presentadas por personas con discapacidad domiciliadas en su ámbito territorial, así como cuando, aun no siendo así, haya tenido lugar en dicha zona la celebración, ejecución o cumplimiento del contrato o la actuación que diera lugar a la queja o reclamación, siempre que no se oponga expresamente una de las partes.

REAL DECRETO 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.

El Real Decreto obliga a que antes de finales de 2012 todas las oficinas de atención al ciudadano del ámbito de la AGE sean universalmente accesibles. De igual modo, tendrán que ser accesibles los procedimientos, la documentación, la información y la atención que reciban los ciudadanos con discapacidad en sus relaciones con la Administración central.

El documento establece que estas dependencias se sitúen en la planta baja o, si no es posible, que se facilite el acceso por medio de rampas y ascensores. La nueva norma contempla también que las oficinas de la Administración deben estar correctamente señalizadas visualmente desde el exterior.

El real decreto elimina también cualquier discriminación en los accesos a impresos, medios telemáticos y cualquier otra vía de comunicación oficial con la Administración. Respecto a la altura de los mostradores y puntos de información, la normativa establece que deberá ser adecuada para recibir a todo tipo de usuarios.

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

La nueva norma armoniza y unifica las condiciones requeridas por las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Además, establece unas condiciones básicas para garantizar la accesibilidad desde el diseño pensado en todos y para su autonomía personal, con una visión más abierta de las necesidades existentes, asumiendo la pluralidad dentro de la discapacidad y mejorando los mecanismos de control existentes.

Edificios

En relación a los edificios, el Real Decreto aprobado hoy en Consejo de Ministros fija las condiciones básicas aplicables a los accesos a los mismos; a los

desplazamientos en una misma planta o entre diferentes plantas; al equipamiento del edificio; a la información y señalización y a la seguridad en caso de incendio.

Por ejemplo, las puertas de entrada tienen que ser accesibles y con señalización e iluminación que garantice su reconocimiento tanto desde el interior como desde el exterior. Asimismo, carecerá de desnivel en el umbral y a ambos lados existirá un espacio para el acceso de usuarios en sillas de ruedas. El pavimento deberá contar con la suficiente textura que disminuya los riesgos de resbalamiento.

Los edificios de hasta dos plantas deberán tener un medio de acceso alternativo a las escaleras, mientras que los más de dos plantas deberán tener ascensores. Además, en salones de actos, salas de espectáculos y locales con asientos fijos deberán existir asientos convertibles cercanos a las vías de salida. Para casos de incendio los edificios con ascensores deberán contar con algunos destinados a personas con discapacidad motora.

Espacios públicos urbanizados

En los espacios públicos urbanizados se establecen, por ejemplo, las condiciones básicas de accesibilidad aplicables a los itinerarios peatonales; a los elementos de urbanización; a los puntos de cruce, entradas y salidas de vehículos; al mobiliario urbano; a las protecciones respecto al tráfico rodado; las obras y las actividades comerciales en la vía pública y a la señalización e información urbana.

En estos espacios el pavimento deberá también contar con la suficiente textura que disminuya los riesgos de resbalamiento, textura que también deberán respetar en cuanto a colores para evitar confusiones a los discapacitados visuales. Asimismo, en líneas generales las farolas y señales de tráfico deberán colocarse lo más cercano posible a la calzada; en caso de zonas estrechas, las farolas y las señales de tráfico se dispondrán adosadas a las fachadas.

Con la normativa que se aprueba, que será desarrollada mediante la aprobación de los correspondientes documentos básicos, que se integrarán en el Código

Técnico de Edificación, se garantizará que todos los edificios y urbanizaciones existentes se adecuen a esta normativa antes del 1 de enero de 2019.

LEY 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Gracias a esta norma, se establecerá servicio de intérprete de lengua de signos en lugares públicos como estaciones y aeropuertos y se facilitarán subvenciones públicas a quienes precisen de ayudas técnicas, como implantes cocleares o audífonos.

El texto indica que tendrá que haber servicios de intérprete de lengua de signos en las actividades culturales, deportivas, de esparcimiento y de ocio que se determinen, como cines, teatros y museos nacionales, así como en las estaciones de transporte marítimo, terrestre y aéreo en las que las autoridades lo consideren necesario por su volumen de viajeros.

Con respecto a las ayudas técnicas, la ley establece que las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas que precisen de apoyos técnicos, como implantes cocleares o audífonos, podrán recibir ayudas económicas públicas, independientemente de la edad que tengan.

Hasta ahora, este tipo de ayudas estaban previstas sólo para las personas de hasta 16 años, por lo que la ley permitirá ahora beneficiarse de ellas también a los adultos.

Las personas sordociegas tienen un apartado específico en la ley para reconocer su situación de especial dificultad. El texto señala que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales deberá realizar un estudio en el que se recojan el número de personas con sordoceguera, sus condiciones de vida y su ubicación geográfica, para determinar los centros de referencia que deberán crearse para atenderlas.

Asimismo, la ley crea el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, que impulsará la accesibilidad de los productos audiovisuales, y el Centro de Normalización de la Lengua de Signos, cuya finalidad será la de investigar, fomentar, difundir y velar por el buen uso de esta lengua.

REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.

Se amplían las prestaciones del servicio universal, a través de la modificación de su reglamento regulador. En concreto:

Se incorpora la obligación de que la guía telefónica “universal” sea accesible a través de Internet con la condiciones de accesibilidad previstas para las páginas web de la Administración pública.

Se amplían las obligaciones relativas a la adaptación de los teléfonos públicos de pago.

Se establece la obligación del operador designado de garantizar una oferta suficiente de terminales fijos adaptados a los distintos tipos de discapacidad.

Se impone a todos los operadores la obligación de que los sistemas de atención al cliente permitan su acceso por personas con discapacidad.

Se encomienda al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la labor de promover la existencia de una oferta suficiente de terminales de telefonía móvil adaptados a los diferentes tipos de discapacidades.

Medidas en materia de accesibilidad a servicios de la Sociedad de la Información:

Se establecen los criterios de accesibilidad aplicables a las páginas de Internet de las Administraciones Públicas o con financiación pública. En concreto, se prevé

que las páginas de Internet se adapten al nivel mínimo de accesibilidad que cumpla las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004. La adaptación de estas páginas se llevará a cabo progresivamente hasta el 31 de diciembre de 2008.

Se establecen unas condiciones básicas de accesibilidad a los equipos informáticos y a programas de ordenador, y se prevé que deberán ser accesibles a las personas mayores y personas con discapacidad.

Se prevé que las normas sobre accesibilidad de páginas de Internet y las condiciones básicas de accesibilidad a equipos informáticos y a programas de ordenador sean aplicables a los servicios y dispositivos de firma electrónica.

Medidas en materia de accesibilidad a medios de comunicación social

Se establecen las condiciones básicas de accesibilidad a los contenidos de televisión. Se indica que los contenidos audiovisuales serán accesibles a todas las personas con discapacidad mediante la incorporación de subtitulación, audiodescripción e interpretación con lengua de signos en los términos previstos específicamente en la legislación general audiovisual.

Se regulan las condiciones de accesibilidad a la televisión digital. A estos efectos, se establece que las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios de televisión digital, así como una oferta suficiente de equipos receptores de televisión digital que permitan recibir sus contenidos de acuerdo con los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.

Se establecen las condiciones básicas de accesibilidad a publicidad institucional en soporte audiovisual. Las campañas de publicidad institucional que se difundan en este tipo de soporte preverán en sus pliegos de cláusulas los procedimientos de acondicionamiento destinados a permitir que los mensajes contenidos sean accesibles a todas las personas con discapacidad y de edad avanzada.

REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

Se regulan los criterios técnicos y los plazos para que taxis, autobuses, trenes o aviones sean accesibles a las personas con discapacidad.

En lo que respecta a los modos de transporte de competencia estatal, el Real Decreto establece un conjunto de medidas para la adaptación tanto de las estaciones (infraestructuras) como del material móvil (autocares, ferrocarriles, buques y aeronaves) a las necesidades de las personas con alguna discapacidad. De este modo, se garantiza unos niveles de igualdad de oportunidades que permitirán la materialización práctica del principio de no discriminación.

Según el compromiso del Gobierno, en el 2018 todos los medios de transporte deberán ser accesibles.

REAL DECRETO 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio.

Este procedimiento se aplicará en las elecciones a Cortes Generales y al Parlamento Europeo, así como a las consultas directas al electorado referéndum). Del mismo modo, se pondrá en práctica en las elecciones a las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas.

En principio, esta fórmula no será de inmediata aplicación para las elecciones locales, "debido a la mayor complejidad y diversidad que caracterizan este tipo de elecciones", por lo que el Ejecutivo ha optado por diferir su regulación a una futura norma específica.

Se consideran personas con discapacidad visual, a los efectos de este decreto, aquéllas que conozcan el sistema de lecto-escritura braille y tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento o sean afiliadas a la

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

ORDEN INT/3817/2007, de 21 de diciembre, por la que se desarrolla el procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio, regulado en el Real Decreto 1612/ 2007, de 7 de diciembre.

LEY 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad

Estas infracciones serán "leves", "graves" o "muy graves", según la importancia de los hechos punibles, y acarrearán unas multas con cuantías que irán desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de un millón de euros.

Los criterios tenidos en cuenta en la graduación de las sanciones serán la intencionalidad del sujeto infractor, la negligencia, el fraude, el incumplimiento de las advertencias previas, el volumen de negocio y el número de personas afectadas.

INFRACCIONES Se considerarán infracciones administrativas las vulneraciones del derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas, acosos, incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables.

Del mismo modo, la ley tipifica como infracciones el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas, especialmente cuando se deriven beneficios económicos para el infractor.

Por ejemplo, el texto considera graves los actos discriminatorios que supongan un trato menos favorable para las personas con discapacidad en relación con otras personas que se encuentren en situaciones análogas o comparables, y como muy

grave el incumplimiento reiterado de los requisitos necesarios para poner en práctica la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (Liondau).

INFORMACIÓN ANUAL La norma incluye una disposición adicional que señala, textualmente, que "el Gobierno, durante los cuatro primeros años posteriores a la entrada en vigor de la ley, presentará a las Cortes Generales un informe anual en el que dé cuenta al menos de las actuaciones efectuadas cada año para la aplicación de la ley".

Del mismo modo, deberá informar del coste económico de dichas actuaciones; de las actuaciones programadas para años sucesivos, con información del coste previsto, y de las infracciones cometidas y las sanciones impuestas en aplicación de esta ley, con especificación del rendimiento económico que han producido.

ORDEN PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo.

Tiene por objeto establecer las especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.

ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de

marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.

Se trata de establecer un referente mínimo común de ámbito estatal que garantiza la igualdad y la no discriminación de las personas que residen en las diferentes Comunidades Autónomas. De este modo, las modificaciones que se incorporan al Código Técnico de la Edificación se han elaborado según el mandato de la Ley de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de 2003.

De este modo, el Código Técnico de la Edificación –una normativa estatal pionera y referente internacional que establece unas exigencias necesarias sobre la eficiencia energética y la protección frente al ruido en los edificios- se amplía y se enriquece, incorporando una demanda de los colectivos de personas discapacitadas. El Código se aprobó en 2006 y su entrada en vigor plena se produjo en 2009.

El Código Técnico de la Edificación establece a partir de ahora unas condiciones mínimas de accesibilidad aplicables a todas las nuevas construcciones. No obstante, el objetivo de esta normativa es alcanzar una accesibilidad real y total y, de esta forma, se abordará su aplicación en los edificios y patrimonio que ya existen.

Las medidas sobre seguridad de utilización que ya regulaba el Código Técnico de la Edificación se amplían para tener en cuenta su uso por parte de personas con discapacidad. Es el caso de elementos arquitectónicos como escaleras, desniveles, rampas, iluminación mínima o reducción del riesgo de atrapamiento.

En caso de incendio, por ejemplo, se incorporan nuevas exigencias para que las personas con discapacidad puedan abandonar el edificio o alcanzar zonas seguras, como la creación de zonas de refugio, ascensores y salidas de emergencia accesibles.

La modificación del Código elimina también la llamada accesibilidad “de segundo nivel” que permitían algunas normativas autonómicas menos estrictas, que creaban itinerarios denominados “practicables”. A partir de ahora, sólo se describe como único y obligatorio un “itinerario accesible” que ha de cumplir las condiciones necesarias para la movilidad de las personas.

El principio de “accesibilidad para todos” amplía el número de colectivos beneficiados por estas novedades en el Código Técnico de la Edificación: además de las personas que se desplazan en silla de ruedas o los invidentes, esta normativa básica incorpora necesidades de otros usuarios como los mayores, las personas con movilidad reducida o los ciudadanos con discapacidad auditiva o cognitiva.

Medidas específicas

En este sentido, el documento básico de accesibilidad prevé e incorpora otra serie de medidas específicas como éstas:

- Condiciones de las viviendas específicas para personas con discapacidad auditiva, plazas reservadas en locales o en espectáculos, o sistemas de bucle de inducción magnética en taquillas o mostradores de información.*
- Puntos de llamada y atención accesible en edificios públicos.*
- Contrastes visuales para que las personas con alguna discapacidad visual los puedan percibir.*
- Pavimentos táctiles en la señalización de elementos potencialmente peligrosos (arranques de escaleras, desniveles, escalera, etcétera), en itinerarios de las vías públicas o en los puntos de atención accesible en edificios públicos.*
- Señalización de alerta en las salidas de vehículos de aparcamientos públicos*

REAL DECRETO 921/2010, de 16 de julio, por el que se modifica el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad aprobado por el Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto, para regular el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

ORDEN PRE/3028/2011, de 4 de noviembre, por la que se establecen los protocolos de actuación y de formación de las tripulaciones de los buques de pasaje y la formación del personal de las empresas navieras que presten servicio en las terminales portuarias para la atención de las personas con discapacidad.

Legislación Internacional.

Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas

El propósito de la Convención, negociada durante cinco años, es el de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. La Convención **entró en vigor en España el día 3 de mayo de 2008.**

Desde su entrada en vigor, la Convención entra a formar parte del derecho positivo en España, siendo directamente invocable por los ciudadanos ante los Tribunales de Justicia y superponiéndose al derecho interno español.

“Artículo 9:

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno

físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas a:

- a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;*
- b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.*

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:

- a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;*
- b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;*
- c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;*
- d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;*
- e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;*
- f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información;*
- g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;*
- h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.”*